

AMPARO EN REVISIÓN 393/2018
QUEJOSA Y RECURRENTE: YURIRIA ITZEL
SIERRA SOLORIO
RECURRENTE ADHESIVO: PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: MARÍA CRISTINA MARTÍN
ESCOBAR
SECRETARIO AUXILIAR: PEDRO LÓPEZ PONCE DE LEÓN

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del **día doce de septiembre de dos mil dieciocho**.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

1. **PRIMERO. Demanda de amparo indirecto.** Por escrito presentado el **treinta y uno de julio de dos mil diecisiete** en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,¹ **Yuriria Itzel Sierra Solorio**, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se indican:

“AUTORIDADES RESPONSABLES:

- 1) *Congreso de la Unión, integrado por;*
- 2) *Cámara de Senadores y*

¹ Folios 2 a 133 del juicio de amparo indirecto *****.

3) Cámara de Diputados.

4) Presidente de la República.

ACTOS RECLAMADOS:

1. Del Congreso de la unión reclamo la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 7 de febrero de 1984, en lo que concierne a los artículos 194, 234, 235 en su último párrafo, 235 Bis, 245, fracción IV y V, 247 en su último párrafo, 368 y 479; los cuales fueron reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, entrando en vigor el 20 del mismo mes y año.

2. Del Congreso de la Unión también reclamo la expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. En específico, reclamo la configuración normativa de la nueva política prohibicionista generada a partir de dicho Decreto, en función de los artículos de la Ley General de Salud, señalados en el punto inmediato anterior.

3. Del Presidente de la República reclamo el decreto del 30 de diciembre de julio (sic) de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

4. Del Presidente de la República también reclamo decreto (sic) del 16 de junio de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

5. De todas las autoridades reclamo los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a mi persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, que se expresa a sí mismo como sujeto responsable, autoconsciente, racional y moral. Derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.”

2. La quejosa invocó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 3, 4, 13, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos; relató los antecedentes del asunto y planteó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

3. **SEGUNDO. Trámite ante el juzgado de distrito.** El Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante acuerdo de **dos de agosto de dos mil diecisiete**,² ordenó la formación del expediente respectivo, lo registró bajo el número *********, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
4. Seguidos los trámites de ley, el **dos de octubre de dos mil diecisiete**,³ el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó la respectiva sentencia el once de diciembre siguiente,⁴ en la que resolvió ***sobreseer en el juicio, al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 345, fracción IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de la Ley General de Salud, reclamados por la quejosa, no incidían en su esfera jurídica con su entrada en vigor, sino que era necesario un acto de aplicación.***
5. **TERCERO. Recurso de revisión.** Inconforme con la anterior determinación, la quejosa, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión mediante escrito de agravios presentado el

² Ibídem. Folios 135 a 138.

³ Ibídem. Folios 710 y 711.

⁴ Ibídem. Folios 713 a 729.

veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete,⁵ ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

6. Por razón de turno, correspondió conocer del recurso al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente, por acuerdo de **diez de enero de dos mil dieciocho**,⁶ lo admitió a trámite y lo registró bajo el expediente *****.
7. El Presidente de la República, por conducto de su delegado, interpuso recurso de revisión adhesiva, mediante escrito presentado el **dieciocho de enero de dos mil dieciocho**,⁷ ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual fue admitido a trámite mediante acuerdo de veintidós de enero siguiente.⁸
8. **CUARTO. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito.** Seguidos los trámites legales, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó la resolución correspondiente el diecinueve de abril de dos mil dieciocho,⁹ mediante la cual determinó:
 - ***Levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, al considerar que las normas reclamadas sí afectaban el interés legítimo de la quejosa al ser estigmatizadoras.***

Pues prohibían el consumo lúdico de la “cannabis sativa”, conformaban un sistema de prohibiciones administrativas y emitían un juicio de valor

⁵ Folios 3 a 42 del amparo en revisión *****.

⁶ Ibidem. Folios 50 y 51.

⁷ Ibidem. Folios 58 a 84.

⁸ Ibidem. Folio 85.

⁹ Ibidem. Folios 128 a 172.

negativo o estigmatizador respecto de los consumidores lúdicos de la marihuana.

El prohibir la autorización para el uso lúdico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, obedecía a un contexto histórico y social, en el que se había construido el estereotipo de que los usuarios de drogas eran peligrosos, enfermos e irresponsables y, en esa tesitura, se les podía considerar como un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional.

Y, la quejosa se ubicaba en el perímetro de proyección del mensaje negativo, pues se ostentaba como consumidora lúdica de marihuana y laboraba en este país.

- *Determinar que no se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo (planteada por el recurrente adhesivo) pues como ya había quedado demostrado, la quejosa contaba con un interés legítimo.*
- *Desestimar la causal de improcedencia prevista en los artículos 63, fracción XXII en relación con el 108, fracciones VI y VIII de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, pues la quejosa sí había formulado conceptos de violación en contra de los actos reclamados.*
- *Declarar infundado que no se pudieran concretar los efectos de una eventual concesión de amparo, al reclamarse una omisión legislativa, por lo que no se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 73, párrafo primero de la Ley de Amparo, y artículo 107, fracción II, párrafo primero constitucional.*

Dado que, de concederse la protección constitucional solicitada, sí se estaría en posibilidad material y legal de concretar los efectos de dicha protección, pues se declarararía la inconstitucionalidad de las normas reclamadas e impediría que, en el futuro, le pudieran ser válidamente aplicadas a la quejosa.

- *Carecer de competencia para conocer del tema de constitucionalidad de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 345, fracción IV*

y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de la Ley General de Salud, por lo que determinó remitir los autos a este Alto Tribunal para que reasumiera su competencia originaria.

9. QUINTO. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdo de **once de mayo de dos mil dieciocho**,¹⁰ el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el recurso de revisión bajo el expediente **393/2018** y determinó que era procedente asumir la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del asunto y turnó el expediente para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

10. SEXTO. Avocamiento. Por acuerdo de **veintiséis de junio de dos mil**

dieciocho,¹¹ la Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

11. Mediante escrito presentado el veintiocho de **junio de dos mil**

dieciocho,¹² el Agente del Ministerio Público adscrito a este Alto Tribunal formuló pedimento, en el que manifestó estimaba se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

12. Por lo que, mediante acuerdo de **tres de julio de dos mil dieciocho**,¹³

la Presidenta de esta Primera Sala tuvo por hechas las manifestaciones

¹⁰ Folios 128 a 132 del Toca.

¹¹ *Ibidem*. Foja 163.

¹² *Ibidem*. Fojas 164 a 178.

¹³ *Ibidem*. Foja 179.

de la representación social y ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en torno a la causal de improcedencia invocada.

13. Vista que desahogó la autorizada de la quejosa mediante escrito presentado el **trece de julio de dos mil dieciocho**,¹⁴ en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONSIDERANDO:

14. **PRIMERO. Competencia.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el Acuerdo General Plenario 5/2013, punto tercero, en relación con el Segundo, fracción III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 345, fracción IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de

¹⁴ *Ibídem*. Fojas 186 a 191.

la Ley General de Salud, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

15. Cabe señalar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento, dispone que los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que, sí el recurso que nos ocupa se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala, y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno; entonces, en términos de lo dispuesto en el punto Tercero del Acuerdo Plenario 5/2013, esta Sala debe avocarse al mismo
16. **SEGUNDO. Oportunidad y legitimación.** No es el caso de analizar la oportunidad de los recursos de revisión ni la legitimación de quienes los interpusieron, pues de estos temas se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento en las fojas nueve a trece de su fallo.
17. **TERCERO. Procedencia.** El recurso de revisión es procedente, en virtud de que se hace valer en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el cual se cuestionó la constitucionalidad de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 245, fracción IV y V, 247, último párrafo,

368 y 479, de la Ley General de Salud. De modo que se surten los extremos del punto Tercero, en relación con el Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece

18. **No obstante lo anterior, en la especie, deben devolverse los autos al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, atento a las siguientes consideraciones.**
19. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el **trece de mayo de dos mil trece**, emitió el **Acuerdo General Número 5/2013**, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.¹⁵
20. El fin de la emisión de este Acuerdo General es reafirmar que este Alto Tribunal dedique sus esfuerzos al conocimiento y resolución de fondo de aquellos asuntos inéditos o que comprendan un alto nivel de importancia y trascendencia sobre constitucionalidad y que, por tal motivo, impacten en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional.
21. Ahora bien, ha sido criterio de este Alto Tribunal, que entre las atribuciones que fueron delegadas a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional de un juicio de

¹⁵ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

amparo indirecto, y que deben ejercer, se encuentra la necesaria para verificar si el mismo cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia; conclusión a la que se ha arribado tomando en cuenta, precisamente, que la finalidad primordial de los Acuerdos Generales que al respecto se han emitido –entre ellos, el 5/2013, como el que le precedió 5/2001 y anteriores– ha sido la de lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conozca exclusivamente de cuestiones de constitucionalidad de trascendencia e importancia, dentro de las cuales, no pueden ubicarse las correspondientes a analizar si la instancia constitucional respectiva, cumple con los requisitos legales que condicionan su procedencia.

22. Así, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, el Tribunal Colegiado de Circuito al que se turne el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestione la constitucionalidad de leyes y tratados internacionales, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, o fijar el alcance de un derecho humano, cuya competencia originaria corresponde a esta Suprema Corte de Justicia, debe proceder de la siguiente forma:

- **Examinar la procedencia del recurso**, es decir, determinar si el escrito que lo contiene cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley; si el medio de impugnación se ubica en alguna de las hipótesis de procedencia a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo; si quien acude a la instancia está legitimado, si la interposición del recurso se verificó dentro del plazo legal;

- **Verificar la procedencia del juicio constitucional**, por lo que determinará si en la sentencia recurrida el juzgador de amparo estudió en su integridad las causas de sobreseimiento e improcedencia hechas valer por las partes, **y, en su caso, analizar las omitidas**; determinar si existe un diverso motivo de inejecutibilidad de la acción de amparo que deba estudiarse de oficio y abordar el análisis de los agravios propuestos por la parte recurrente, en relación con las causas de improcedencia que se estimaron actualizadas o, en su caso, infundadas;
- **Verificar la regularidad del procedimiento del juicio**, advirtiéndole si se actualiza alguna violación que conduzca a revocar la sentencia impugnada y a ordenar su reposición de conformidad con lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo;
- Una vez **superados los presupuestos anteriores**, es decir, de resultar procedente el juicio, **establecer si el asunto queda comprendido en alguno de los supuestos de competencia delegada** a los Tribunales Colegiados de Circuito (según el Acuerdo General referido); y en caso de que no se ubique en tal hipótesis, sino en alguna por la que tiene competencia originaria esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejará a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad.

23. De lo anterior, se llega al convencimiento que para la aplicación del Acuerdo 5/2013 transcrito, los tribunales colegiados, una vez que reciban un asunto para revisión, y antes de considerar remitir el mismo a esta

Suprema Corte de Justicia (por subsistir problema de constitucionalidad), **deben analizar todas aquellas cuestiones de improcedencia que no permitan a este Alto Tribunal a que se constriña única y exclusivamente al estudio de la constitucionalidad planteada.**

24. Así es, si la finalidad de este Alto Tribunal al emitir el Acuerdo 5/2013, es revisar los asuntos en donde exclusivamente se tenga que estudiar el problema de constitucionalidad hecho valer, debe entonces considerarse que, en los casos en que se reclame en un juicio de amparo indirecto, la inconstitucionalidad de una ley o de un Tratado Internacional, o que se hubiese planteado la interpretación directa de un precepto constitucional, o la fijación del alcance de un derecho humano, siendo competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictarse en la audiencia constitucional la sentencia por el Juez de Distrito o Tribunal Unitario, en donde si bien realizó el estudio de fondo, pero omitió estudiar las causales de improcedencia hechas valer por alguna de las partes (terceros interesados, autoridades responsables y Ministerio Público de la Federación), que en su caso pueden llegar a constituir un impedimento para el estudio del problema de fondo planteado, el Tribunal Colegiado de Circuito, que tenga conocimiento del asunto, deberá analizar todas esas cuestiones para que, en caso de no operar alguna causa de improcedencia u otra que pueda advertir de oficio, y subsistiendo el problema de constitucionalidad, dejando a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordene la remisión del recurso para que se avoque única y exclusivamente, sin más cuestiones, al problema de

constitucionalidad planteado, cumpliendo así con el multicitado Acuerdo General 5/2013.

25. Ahora bien, en la especie, de las constancias que integran los autos del juicio de amparo indirecto *********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, como del amparo en revisión *********, radicado ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte lo siguiente:
26. Las autoridades responsables hicieron valer las siguientes las causales de improcedencia y sobreseimiento, al rendir sus informes con justificación y al interponer recurso de revisión adhesivo:

A) La Cámara de Diputados:¹⁶

1. *“Por lo que respecta al acto reclamado, marcado con el inciso b), [los actos tendientes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a mi persona como individuo libre y autónomo] **dicho acto no es cierto.**”*
2. *“(…) **no se le causa ningún perjuicio**, puesto que **la norma impugnada no vulnera sus derechos fundamentales**, al advertirse que los artículos reclamados, no resultan violatorios de ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.”*

B) La Cámara de Senadores:¹⁷

1. *“Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa a esta autoridad responsable; no obstante, se desprende que la sola **discusión, votación y aprobación** de la Ley General de Salud, en concreto, lo relativo a los artículos 194, 234, 235, en su último párrafo, 235 BIS. 245 fracción (sic) IV y V, 247 en su último párrafo, 368 y 479; así como del Código Penal Federal, mismos que **no causan afectación***

¹⁶ Folios 151 a 159 del juicio de amparo indirecto *********.

¹⁷ Ibídem. Folios 162 y 163.

alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo que se llevó a cabo en este Cuerpo Colegiado, no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera de derechos del amparista. Debe estimarse, que el daño que reclama la parte impetrante del amparo se atribuye a un acto de ejecución posterior, mismo que no es propio y es totalmente independiente del ámbito de facultades y atribuciones de esta autoridad del Poder Legislativo Federal, por lo que deberá negarse el beneficio del amparo y protección constitucional a favor del promotor del amparo.”

c) El Presidente de la República:¹⁸

1. “Se **niega** que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, realice **actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales** inherentes a la persona del quejoso como individuo libre y autónomo (...)

(...)

*Primero. Respecto de los actos que se han negado, procede dictar el sobreseimiento con fundamento en el **artículo 63, fracción IV**, de la Ley de Amparo (...)*”

2. “Respecto del acto que se ha aceptado, consistente en **la promulgación del decreto** que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud (...) procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, **al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal.**

*Lo anterior toda vez que, del análisis integral a la demanda, no se advierte que la parte quejos aduzca en **contra de la promulgación** de la Ley General de Salud, algún vicio de inconstitucionalidad, esto es, **omite formular conceptos de violación** en contra de tal acto.”*

3. “Respecto del acto que se ha aceptado, consistente en **la emisión del decreto** que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud (...) procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, **al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal.**

¹⁸ Ibídem. Folios 171 a 194 y 58 a 84 del amparo en revisión *****.

Lo anterior toda vez que, del análisis integral a la demanda, no se advierte que la parte quejos aduzca en **contra de dicho decreto**, algún vicio de inconstitucionalidad, esto es, **omite formular conceptos de violación** en contra de tal acto.”

4. “(...) procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al **actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 73, párrafo primero, ambos del ordenamiento legal citado con anterioridad y artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** (...)

(...)

(...) es inconcuso que resulta **improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa**, pues **de concederse la protección** constitucional a la parte quejosa, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, **dando efectos generales a la ejecutoria**, lo cual implicaría la creación de una ley (...).”

5. “En relación con los artículos 194, 234, 235 en su último párrafo, 235 BIS, 245, fracción (sic) IV y V, 247 en su último párrafo, 368 y 479 de la Ley General de Salud, así como también los artículos 237, último párrafo, 245, fracciones I, II y IV, 290 párrafo primero, 235 BIS y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245, de la misma Ley General de Salud, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, **es improcedente** conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en virtud de que el otorgamiento implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad en general, así como a diversos ordenamientos legales. Lo anterior **de conformidad con el artículo 51, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X, 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, puesto que **su concesión sería nugatoria** para el quejoso ante la inexistencia de una plataforma política integral para autorizar el uso de marihuana con fines lúdicos (...)

(...)

(...) es de concluir que el quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita, o al menos, no dentro de la ley, pues sigue penalizada la adquisición de marihuana (...)”¹⁹

6. “**En relación con los artículos** 194, 234, 235 en su último párrafo, 235 BIS, 245, fracción (sic) IV y V, 247 en su último párrafo, 368 y 479 de la Ley General de Salud, así como también los artículos 237, último párrafo, 245, fracciones I, II y IV,

¹⁹ Causal que también se hizo valer en el recurso de revisión adhesivo.

290 párrafo primero, 235 BIS y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245, de la misma Ley General de Salud, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo considerando que **la hoy quejosa carece de interés jurídico o legítimo**, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.”²⁰

7. “**Respecto del decreto** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017 (...) procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción (sic) XII y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 107, fracción I, todos del ordenamiento legal citado con anterioridad. (...)”

(...)

Sin embargo, en el caso en particular, **la quejosa no acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo**, debido a que deja de demostrar de manera fehaciente contar (sic) haber solicitado una autorización para los actos que pretende y para los que involucran los preceptos legales reformados y adicionados que reclama, ante alguna autoridad gubernamental administrativa o sanitaria.”²¹

27. El Juez de Distrito al dictar sentencia, específicamente en los considerandos tercero y cuarto,²² se pronunció únicamente respecto de las siguientes causales de improcedencia:

- Tuvo como ciertos los actos reclamados, en el ámbito de su respectiva competencia, a las Cámaras de Senadores y Diputados, ambas del Congreso de la Unión, y al Presidente de la República, consistentes en la expedición y promulgación de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 345, fracción IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de la Ley General de Salud.
- Sobreseyó el juicio, al tener por actualizada la causal de improcedencia **prevista en el artículo 61, fracción XII**, de la Ley de Amparo, al considerar que **los artículos** 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 345, fracción IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de la Ley General de Salud, reclamados por la quejosa, **no incidían en su esfera**

²⁰ Ídem.

²¹ Ídem.

²² Folios 715 a 728 del juicio de amparo *****.

jurídica con su entrada en vigor, sino que era necesario un acto de aplicación.

28. El Tribunal Colegiado del conocimiento, en la resolución dictada en sesión de **diecinueve de abril de dos mil dieciocho**, tras levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, al considerar que la quejosa sí contaba con un interés legítimo para impugnar los artículos reclamados, desestimó las siguientes causales de improcedencia:

- *No se actualizaba la causal de improcedencia relacionada con la falta de interés jurídico de la quejosa, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. (reseñadas en los incisos A] 2 y C] 6 y 7)*
- *Declaró infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, pues la peticionaria de amparo sí había formulado conceptos de violación en contra de los actos reclamados. (reseñada en el inciso C] 2 y 3)*
- *No se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 73, párrafo primero de la Ley de Amparo, y artículo 107, fracción II, párrafo primero constitucional, ya que no se había reclamado una omisión legislativa. (reseñada en el inciso C] 4)*
- *Tampoco era cierta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, de la Ley de Amparo, pues sí podrían concretarse los efectos de una eventual concesión del amparo, a pesar de la inexistencia de la plataforma política integral para autorizar el uso de la marihuana con fines lúdicos. (reseñada en el inciso C] 5)*

29. De lo relatado se evidencia, que en el caso que nos ocupa, el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito, omitieron realizar el estudio correspondiente de todas las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, pues únicamente se pronunciaron

respecto a las relativas a (1) la inexistencia de los actos; (2) la afectación al interés jurídico de la quejosa respecto a los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 345, fracción IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de la Ley General de Salud; (3) la no formulación de conceptos de violación; (4) la transgresión al principio de relatividad de las sentencias de amparo; y, (5) la imposibilidad de concretar los efectos de una eventual concesión del amparo.

30. Sin embargo, **no se pronunciaron** respecto de la causal que hizo valer la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión consistente en que:

*1) Los actos reclamados consistentes en la **discusión, aprobación y expedición** de los artículos reclamados, en sí mismos (proceso de reformas), **no afectaban la esfera jurídica de la quejosa** (resumida en el inciso B] 1);*

31. Ahora bien, como ya quedó demostrado, el Tribunal Colegiado del conocimiento, en la sentencia en la que ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba obligado a pronunciarse sobre las aludidas causales de improcedencia, en la medida que las cuestiones de procedencia del juicio son de estudio preferente y de orden público, y su análisis corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, para que así, este Alto Tribunal esté en condiciones de avocarse, única y exclusivamente, al examen de constitucionalidad del tema propuesto.

32. Esto, al resultar relevante la falta de estudio de la causal omitida, relativa al **procedimiento legislativo** (discusión, votación y aprobación) que dio

lugar a la expedición de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 245, fracción IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479, de la Ley General de Salud pues, respecto al mismo, el Tribunal Colegiado levantó el sobreseimiento decretado por el Juez de distrito y solicitó que este Alto Tribunal asumiera su competencia originaria; siendo que, previamente, debió resolverse sobre la improcedencia alegada por la autoridad responsable.

33. Idénticas consideraciones sostuvo esta Primera Sala, al resolver, entre otros, los amparos en revisión [254/2016](#),²³ [697/2016](#),²⁴ [523/2017](#),²⁵ [911/2017](#)²⁶ y [982/2017](#).²⁷
34. En tales condiciones, en virtud de que es al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien compete, entre otras cuestiones, pronunciarse respecto de las causales de improcedencia que eventualmente puedan impedir el análisis de fondo del tema de constitucionalidad planteado; a dicho órgano jurisdiccional

²³ Resuelto en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (ponente). En contra del voto emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea.

²⁴ Resuelto en sesión de once de febrero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (ponente).

²⁵ Resuelto en sesión de siete de marzo de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. En contra del voto emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea (ponente).

²⁶ Resuelto en sesión de diez de enero de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (ponente). En contra del voto emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea.

²⁷ Resuelto en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. En contra del voto emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea (ponente).

se deben devolver los autos, para que dé cumplimiento al contenido del Acuerdo Plenario 5/2013.

35. En apoyo de lo anterior y por las razones que informa, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 85/2002, de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice:

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVERSE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El punto quinto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver las cuestiones de procedencia en los casos en que se hubiera impugnado, en amparo indirecto, una ley federal o un Tratado Internacional, o se hubiere planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, no hubieren abordado el estudio de esas cuestiones por haber sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia; en tales supuestos, el propio acuerdo en su punto décimo primero, fracciones I, II y III, establece que el Tribunal Colegiado de Circuito abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubiere omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio; asimismo, que de resultar procedente el juicio, el referido Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad. Sin embargo, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito se limite a estudiar el motivo de sobreseimiento decretado por el a quo, revocándolo y remitiendo los autos a este Máximo Tribunal, sin hacerse cargo de las demás causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, lo procedente es devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, ocupándose del estudio de la totalidad de las causas de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y no exista motivo alguno que impida el análisis de fondo de inconstitucionalidad, deje a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remita los autos respectivos.

36. Consecuentemente, lo que procede es devolver los autos al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tuvo conocimiento del asunto, con el objeto que dé cumplimiento al contenido del Acuerdo Plenario 5/2013, emitido por esta Suprema Corte de Justicia, es decir, para que se haga cargo de la causal de improcedencia cuyo estudio ha sido omitido hasta esta instancia; y sólo en el caso de que llegare a desestimarla y, de no advertir alguna otra de oficio, ni diverso motivo que impida el análisis de fondo del asunto, deje a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal, enviándole los autos relativos.

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE:

ÚNICO. Devuélvanse el recurso de revisión ***** y los autos del juicio de amparo *****, al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente), en contra del emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Firman la Ministra Presidenta de la Sala y Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”